



AUTO INTERLOCUTORIO

PROCESO	Ejecutivo
EJECUTANTE	Fiduciaria la Previsora S.A. en nombre del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria en Liquidación
EJECUTADO	Departamento de Antioquia
RADICADO	05-001-31-05-002-2022-00095-01
TEMA	Control de legalidad. Título ejecutivo
DECISIÓN	Confirma el auto recurrido

El veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 128** de discusión de proyectos, dentro del proceso ejecutivo promovido por **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN** contra el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, con radicado 05-001-31-05-002-2022-00095-01.

• **AUTO RECURRIDO:**

Por auto del 30 de marzo de 2023, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín resolvió “*Dejar sin efecto el auto del 16 de junio de 2022, mediante el cual se libró mandamiento de pago a favor de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN y en contra del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y en consecuencia, terminar con la presente ejecución*” Como consecuencia, dispuso el archivo del proceso.

• **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por la parte **ejecutante**, quien a través de su mandataria judicial la sustentó en los siguientes términos: *“De conformidad con el decreto 2721 de 2008, art. 1, la administración de las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con anterioridad a la fecha de traslado al Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, estará a cargo de la entidad que se designe por Fogafín, el cual designó la administración de estas a la Fiduciaria la Previsora S.A. en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria en Liquidación. Por ende, como administrador, tenemos la obligación de cobrar, debido a que el departamento de Antioquia adeuda esas sumas de dinero que pertenecen a la Nación, encontrándose la deuda vigente. Con respecto al incremento del valor de la mesada dimos respuesta al Departamento de Antioquia por medio de varias comunicaciones, anexando los documentos que justificaban los mismos, comunicación del 4 de marzo de 2022 emitida por la UGPP que certificaba el incremento anual de los pensionados, así como también la certificación del FOPEP. Nosotros, como meros administradores tenemos que cumplir con una serie de requisitos y entre ellos tenemos que acogernos a lo cancelado o pagado por parte del FOPEP, que es la entidad que realiza los pagos de dichas pensiones o de dichas cuotas.”*

- **ALEGATOS:**

Departamento de Antioquia: Fueron presentado en términos similares a los de la contestación, advirtiendo que el título que se pretende reclamar por la vía ejecutiva no es claro, toda vez que se evidencia un incremento abrupto de las mesadas pensionales. Solicita como consecuencia, se confirme el auto recurrido.

CONSIDERACIONES:

Mediante auto del 16 de junio de 2022, el Juzgado Segundo laboral del Circuito de Medellín libró mandamiento de pago en favor de Fiduciaria la Previsora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria en Liquidación y en contra del departamento de Antioquia, así: *“...por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$248.157.525.81) por concepto de capital por cuotas partes pensionales, más los intereses moratorios que se causen desde que las obligaciones se hicieron exigibles hasta que se realice el pago de las mismas (...) por la suma de VEINTITRES MILLONES*

CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$23.405.529.45) por concepto de intereses moratorios”

En audiencia celebrada el 30 de marzo de 2023, previo a resolver las excepciones formuladas por la ejecutada, el juzgado hizo control de legalidad de las actuaciones y resolvió dejar sin efecto el auto anterior, al considerar que no hay claridad en el título ejecutivo con relación a las cuotas partes pensionales reclamadas a partir del 1° de noviembre de 2016, al advertir que la liquidación realizada por las partes por concepto de mesadas pensionales se ajusta a derecho hasta octubre de ese mismo año, pero que a partir del mes siguiente se evidencia un incremento injustificado, del cual no se allegó al expediente soporte alguno que lo justifique.

Atendiendo a la apelación formulada por la ejecutante, el problema jurídico que abordará esta Sala del Tribunal se circunscribe en determinar si es procedente a través de un control de legalidad dejar sin efectos el auto que libró mandamiento de pago, para finalmente establecer si se acreditaron las condiciones para que el título ejecutivo reclamado preste mérito ejecutivo.

i) Control de legalidad

Son deberes del juez realizar el control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa del proceso, según lo establecido en el numeral 12 del artículo 42 del Código General del Proceso, aplicable por remisión de normas al procedimiento laboral.

Y, respecto al control de legalidad en los procesos ejecutivos, ha tenido oportunidad de pronunciarse la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en especial, en sentencia de tutela 46034 del 8 de febrero de 2017, en la que indicó:

“Al respecto, el hecho de que en el proceso se haya librado mandamiento de pago, y que posteriormente el juez advirtiera la inexistencia del título base de la ejecución, es un aspecto que no desborda la legalidad de la decisión ni constituye un quebranto a las prerrogativas de las partes en litigio, comoquiera «que en tratándose de títulos ejecutivos, es deber del fallador examinar la plena configuración de sus requisitos, de tal suerte que si no se percata oportunamente, esto es, para librar la orden de apremio o mediante excepción de parte, se impone la revisión de las falencias que puedan desvirtuarlo, antes de proferir el fallo correspondiente» , que fue lo que ocurrió en este asunto.”

En tales términos, es acertada la decisión del juzgado de instancia de realizar un control de legalidad de las actuaciones, en especial al advertir que el título ejecutivo reclamado no cumple con las condiciones para prestar mérito ejecutivo.

ii) Título ejecutivo

El proceso ejecutivo parte de la existencia de la certeza sobre el derecho reclamado, la cual debe estar contenida en un título que preste mérito ejecutivo, que debe cumplir unas condiciones esenciales, a saber: a) que haga prueba por sí mismo sin necesidad de complementarlo con algún reconocimiento, cotejo o autenticación; b) que mediante el mismo se pruebe la existencia de una obligación patrimonial determinada, líquida, lícita y exigible en el momento en que se inicial el juicio; y c) que ofrezca plena certeza frente a la titularidad del crédito – acreedor- y ante quien puede ser exigido – deudor-.

Los requisitos de obligación expresa, clara y exigible, merecen entenderse en su cabal significado.

Obligación expresa. Esto significa declarar precisamente lo que se quiere dar a entender. El documento entonces debe contener una obligación expresa, es decir, debe consignarse en él, el contenido y alcance de la obligación, las partes vinculadas y los términos en que la obligación se ha estipulado.

Obligación clara. La claridad hace relación especialmente a su inteligibilidad, es decir que no sea equívoca ni confusa y que únicamente pueda entenderse en un solo sentido.

Obligación exigible. La exigibilidad significa que la obligación pueda pedirse, cobrarse o demandarse. La obligación es exigible cuando válidamente puede pedirse o demandarse su cumplimiento al deudor. El plazo y la condición constituyen dos hechos que impiden la exigibilidad. El *plazo* es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. La *condición* es un acontecimiento futuro que puede suceder o no y suspende el cumplimiento de la obligación hasta que se produzca el advenimiento del hecho.

Considera esta Sala del Tribunal que la obligación que pretende cobrar el ejecutante se encuentra soportada en un título ejecutivo complejo, el cual se deberá componer de las resoluciones por medio de las cuales se reconocieron las pensiones, así como los actos administrativos en firme que liquiden las cuotas partes pensionales. Así lo ha explicado el Consejo de Estado en la sentencia también citada por el juzgado del conocimiento fechada 5 de marzo de 2020, radicado 25000-23-37-000-2015-01522-01(23598) “[P]ara que el cobro ejecutivo de las cuotas partes pensionales pudiera llevarse a cabo, debió integrarse un título ejecutivo conformado por la resolución que reconoce el derecho a la pensión, y el acto administrativo que liquida las cuotas partes pensionales respecto de las mesadas pensionales causadas y pagadas que no estén prescritas, expedidas conforme al procedimiento establecido por la ley. Para el caso de las cuotas partes pensionales a cargo de las entidades públicas, no basta con la presentación de una liquidación certificada de la deuda, en los términos del artículo 24 de la ley 100 de 1993, comoquiera que para ello debe agotarse un procedimiento especial, para conformar un título ejecutivo compuesto por los documentos antes reseñados, que den plena cuenta del carácter claro, expreso y exigible de las cuotas partes pensionales objeto de cobro”

En el presente asunto, la Fiduciaria la Previsora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria en Liquidación reclama por la vía ejecutiva al departamento de Antioquia la suma de \$248.157.525.⁸¹ por concepto de capital por cuotas partes pensionales adeudadas, así como \$23.405.529.⁴⁵ por intereses moratorios, con relación a los siguientes pensionados y períodos:

No.	Pensionado	Periodo cobrado
1	Jesús Antonio Montes Ramírez	Del 1 de noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2021
2	Gabriela Díaz Hoyos	Del 1 de noviembre de 2016 al 31 de agosto de 2021
3	Hernando Munera Araque	Del 1 de noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2021
4	Jesús María Zapata Giraldo	Del 1 de noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2021
5	Juan Bautista Ocampo Gómez	Del 1 de noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2021
6	Luis Bernardo Palacio Villa	Del 1 de noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2021
7	Mercedes Giraldo Viuda de Gómez	Del 1 de noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2021
8	Francisco Alfonso Agudelo Mejía	Del 1 de noviembre de 2016 al 31 de agosto de 2018
9	Leopoldo Pérez Montes	Del 1 de noviembre de 2016 al 30 de septiembre de 2017
10	Pedo Nel Lezcano	Del 1 de noviembre de 2016 al 29 de febrero de 2020

El control de legalidad realizado por el juzgado se debe a que, si bien en el expediente se allegaron las resoluciones que reconocen el derecho pensional, así como las reclamaciones que se le hiciera al ejecutado, no se encuentra soporte alguno que dé cuenta de por qué las mesadas reclamadas a partir del 1° de noviembre de 2016 tuvieron un incremento abrupto en comparación al mes anterior.

En el documento visible en las páginas 177 a 192 del pdf “002 Demanda Ejecutiva Laboral 7 Mar 22”, esto es, el detalle de cuota parte pensional realizado por la entidad ejecutante, se observa la pensión se incrementó en los términos señalados por el artículo 14 de la ley 100 de 1993 hasta octubre de 2016; sin embargo, para el mes siguiente, esto es, noviembre y diciembre de 2016 la mesada tuvo un incremento injustificado, del cual no se encuentra soporte alguno en el expediente. Nótese además que fue esta última mesada la que se tuvo en cuenta para hallar el valor de la mesada correspondiente al año 2017.

Se hace necesario advertir que el reajuste pensional se realiza de oficio el 1° de enero de cada año, por lo que no se encuentra soporte alguno que justifique el incremento pensional para el 1° de noviembre de 2016.

Y es que, en términos de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en sentencia del 9 agosto 1989 “*Si el título o documento que puede servir de base para el ejercicio del derecho de acción, no ofrece la plenitud probatoria que exige el artículo 488 del C. de P.C., contra quien debe ser demandado, a así lo considera quien va a promover la actuación, resulta pertinente seguir el trámite del proceso ordinario, a fin de lograr los pronunciamientos que esclarezcan la situación litigiosa que imponga las condenas que fuesen necesarias.*”

Corolario de todo lo dicho, debido a que la obligación que se pretende reclamar no es clara y no se encuentra debidamente soportada, el título que se pretende reclamar no presta mérito ejecutivo, por lo que en tal sentido se **CONFIRMARÁ** el auto recurrido por vía de apelación.

En esta instancia no se causaron costas procesales.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**,

RESUELVE:

Se **CONFIRMA** el auto recurrido por vía de apelación de fecha y procedencia conocida.

Sin costas procesales en esta instancia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 090 del 29 de mayo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>